

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN AUTO	
DEMANDANTE	MARÍA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO
DEMANDADO	CENTRO EDUCATIVO INFANTIL LOS OSITOS S.A.S.
RADICADO	05001-31-05-001-2020-00412-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Decreto de Pruebas e incidente de nulidad
DECISIÓN	Revoca parcialmente

Medellín, veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO** contra el **CENTRO EDUCATIVO INFANTIL LOS OSITOS S.A.S.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 019**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

La señora MARÍA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO demandó al CENTRO EDUCATIVO INFANTIL LOS OSITOS S.A.S., solicitando SE DECLARE lo siguiente:

“PRIMERA: Declarar que la terminación del contrato de trabajo de la señora MARIA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO es ineficaz, por violar la estabilidad laboral reforzada que amparaba al haber sido terminado su contrato sin permiso del Ministerio del Trabajo.

SEGUNDA: Consecuencialmente, se ordene a la sociedad demandada reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando para el momento de la terminación de su contrato de trabajo, en las mismas o mejores condiciones y respetando sus restricciones médicas

TERCERA: Que se condene al CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S. a pagar a la demandante la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social causados entre la fecha de terminación de su contrato de trabajo y la fecha en que sea efectivamente reintegrada.

CUARTA: Que se condene a la sociedad demandada a la indexación de las condenas que se impongan.

QUINTA: Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas del proceso.”

Y como sustento probatorio de sus hechos y pretensiones, solicitó el decreto y practica de varios medios probatorios: documental, testimonial, e interrogatorio de parte al representante legal de CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S.

Dentro de la PRUEBA DOCUMENTAL anunció la siguiente:

5.1.26. Grabación magnetofónica tomada el día 30 de noviembre de 2017 en el cual se exponen las razones de la terminación del vínculo contractual.

Admitida la demanda, y notificado en debida forma su auto admisorio, la demandada dio respuesta oportuna, pronunciándose frente a cada uno de los hechos y pretensiones formuladas por la parte activa, y en su escrito de réplica también solicitó el decreto y práctica de las pruebas que estimó pertinentes y necesarias para resolver la Litis.

Para lo que nos interesa, la demandada CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S., solicitó el decreto y practica de una declaración de parte de las

señoras CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO ÁNGEL (Representante Legal) y de CLARA MARÍA VELÁSQUEZ MOLINA (Representante Legal – Suplente).

NOMBRAMIENTOS	
NOMBRAMIENTOS:	
CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACION	
GERENTE	CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO A.
42.871.784	
	DESIGNACION
SUPLENTE	CLARA MARIA VELASQUEZ M.
42.869.318	
	DESIGNACION

II. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, y decreto de pruebas, prevista en el art. 77 del CPTSS, celebrada el 15 de febrero de 2023, el Juez de conocimiento decidió decretar todas y cada una de las pruebas solicitadas por las partes, a excepción de la DECLARACIÓN DE PARTE respecto a las señoras CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO ÁNGEL (Representante Legal) y de CLARA MARÍA VELÁSQUEZ MOLINA (Representante Legal – Suplente).

Al considerar frente a este último medio probatorio, que no representaba ninguna utilidad para la litis, pues las mismas partes ya fijaron sus posiciones tanto en la demanda como en su contestación, además al tratarse de la misma representante legal del CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S. y su suplente, la práctica de esta prueba no tendría ninguna finalidad probatoria, como sería buscar la confesión de una de las partes, por el contrario se prestaría para que esa parte que solicita la prueba, fabrique su propia prueba o introduzca hechos nuevos al proceso por fuera de las oportunidades procesales.

III. RECURSO DE APELACIÓN e INCIDENTE DE NULIDAD

La anterior decisión fue recurrida en apelación por el apoderado judicial del CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S. quien insiste en utilidad y pertinencia de la DECLARACIÓN DE PARTE respecto a las señoras CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO ÁNGEL (Representante Legal) y CLARA MARÍA VELÁSQUEZ MOLINA (Representante Legal – Suplente), argumentado para ello, que contrario a lo colegido por la funcionaria judicial de primer grado, con tal medio probatorio no se persigue una confesión, simplemente se está haciendo uso de uno de los medios de prueba a los que alude el Código General del Proceso.

Y respecto a la prueba documental decretada a favor de la parte demandante, concretamente aquella denominada: *“GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA TOMADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL CUAL SE EXPONEN LAS RAZONES DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL”* propuso un INCIDENTE DE NULIDAD, por considerar que dicha prueba es ilegal a la luz del art. 29 de la Constitución Política de 1991, y por ello debía declararse como nula de pleno derecho, excluyéndose de la valoración probatoria.

La juez de primer grado, rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto, al estimar que de conformidad con el art. 130 del Código General del Proceso, se debe rechazar de plano el incidente, pues la situación planteada no se encuentra enlistada en el art. 133 del CGP, y tampoco reúne los requisitos formales, al no haberse solicitado pruebas que se pretendan hacer valer en el incidente.

El apoderado de la demandada propone recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que el incidente propuesto cumplió con los requisitos previstos en el Código General del Proceso, no solo se dictaron los hechos, la pretensión, el fundamento, sino que en la misma argumentación se hizo alusión a la prueba frente a la cual se debe realizar la valoración que no es otra que la grabación se está decretando su inclusión.

La Juez Primera Laboral del Circuito de Medellín, decidió no reponer lo resuelto, y conceder el recurso de apelación ante este Tribunal de Distrito Judicial, al estimar que las pruebas que no aportó el incidentista eran aquellas por las cuales no podía tenerse en cuenta la grabación magnetofónica allegada por la parte activa, y no la grabación como tal.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la parte demandante, solicita se confirme lo decidido frente al rechazo de plano del incidente de nulidad propuesto, por cuanto no se configura causal de nulidad alguna con la incorporación al proceso de la grabación magnetofónica realizada por la demandante para demostrar las razones de su desvinculación. Siendo acertado el análisis efectuado en la primera instancia respecto de la validez de las grabaciones magnetofónicas, realizadas sin el consentimiento de todos los participantes, lo cual implicaba un juicio de razonabilidad entre los derechos en juego y sobre las condiciones que rodearon la misma, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia nacional como es el caso de la sentencia SU-371 de 2021, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de junio de 2007, Expediente N.º 2000-751 con ponencia del Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, al igual que la doctrina.

IV. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. –Decreto de pruebas, conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, Incidente de nulidad.:

Es posible revisar los autos por vía de apelación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 65 numeral 4º y 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, habida cuenta que la providencia dictada en la audiencia del 15 de febrero de 2023, decidió negar el decreto y practica de una prueba.

“ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.

2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.

3. El que decida sobre excepciones previas.

4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.

5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.

6. El que decida sobre nulidades procesales.

(...)"

DECRETO DE PRUEBAS

Al respecto, debe recordarse que a la luz de lo dispuesto por el Código General del Proceso los sujetos procesales cuentan con libertad probatoria, lo que se traduce en que pueden hacer uso de los diferentes medios de prueba que la ley procesal enuncia para lograr la respuesta al problema jurídico planteado a favor de sus intereses, así lo dispone el art. 165 del CGP, veamos:

“ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. (negrillas y subrayas de la Sala).

Debe recordarse que la DECLARACIÓN DE PARTE (art. 191 CGP), fue una de las modificaciones que en materia procesal introdujo el actual Código General del Proceso - LEY 1564 DE 2012, siendo reconocida esta prueba por el propio legislador como un MEDIO PROBATORIO AUTÓNOMO, y posibilita la citación a declarar a la propia parte, lo cual no era permitido bajo el anterior paradigma del Código de Procedimiento Civil, donde solo se permitía a cada

parte citar a la otra a interrogatorio, a efectos de lograr exclusivamente su confesión.

Y por ello aquellas manifestaciones que no constituyeren una confesión como tal, quedaban relegadas del análisis probatorio, pues ya las partes habían fijado su posición en los correspondientes actos introductorios.

Esa característica que detenta la declaración de parte como MEDIO PROBATORIO AUTÓNOMO, se encuentra plasmada en el inciso final del art. 191 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:

- 1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.*
- 2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.*
- 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.*
- 4. Que sea expresa, consciente y libre.*
- 5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.*
- 6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.*

La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. (Negrillas de la Sala).

Y bajo este último inciso, todas aquellas manifestaciones de la parte, que no sean confesión, deberán ser tenidas en cuenta por el administrador de justicia al momento de resolver la Litis, de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, como se indica en la norma en cita. .

No obstante, en materia laboral y seguridad social, existe norma expresa que faculta al operador judicial para rechazar aquellas pruebas y diligencias que estime inconducentes para resolver la litis, así está establecido en el art. 53 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, veamos:

“ARTICULO 53. RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS INCONDUCTENTES. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición.

El nuevo texto es siguiente:> El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

En cuanto a la prueba de testigos, el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos o los otros medios de convicción que obran en el proceso.

La anterior normativa, habilita entonces al administrador de justicia a realizar un análisis de la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba solicitada; entendiendo por **CONDUCENCIA** que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; por **PERTINENCIA**, que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso, y por **UTILIDAD** que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio.

EL CASO CONCRETO:

De conformidad con las anteriores consideraciones de orden jurídico, y evaluado el material probatorio arrimado al proceso, la Sala considera que en la presente Litis, se debe revocar la decisión de la *A Quo* de no decretar la DECLARACIÓN DE PARTE respecto a las señoras CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO ÁNGEL y CLARA MARÍA VELÁSQUEZ MOLINA, quienes fungen como Representantes Legales – Principal y Suplente de la demandada CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S.

Para la Sala esa finalidad de “confesión” otorgada a la prueba, por la funcionaria judicial de primer grado durante la etapa procesal del decreto de pruebas, partió de un incorrecto análisis jurídico frente al medio probatorio solicitado, pues no lo consideró un medio probatorio autónomo como en realidad correspondía en los términos del inciso final del art. 191 del Código General del Proceso, sino que lo ligó al revaluado esquema del Código de Procedimiento Civil, vulnerando con ello el principio de libertad probatoria que le asistía a la parte demandada, entendido este último como la autorización para

demostrar los hechos del proceso con cualquier medio de prueba, toda vez que no existe una tarifa legal que demande un medio de convicción único o específico para probar un hecho determinado.

Y al ser ello así, la declaración de parte solicitada, debía decretarse, practicarse, y valorarse como un simple relato sobre las circunstancias fácticas que desencadenaron la problemática que ha de resolverse en el juicio, aplicándose para ello las reglas de la sana crítica y la valoración conjunta de la prueba.

Motivos por los cuales habrá de revocarse lo resuelto en este sentido, y ordenar el decreto de este medio probatorio autónomo.

Incidente de Nulidad

Finalmente, y en relación al incidente de nulidad propuesto, que fue rechazado de plano en la primera instancia, considera la Sala que NO le asiste razón al apoderado judicial de la parte demandada en sus argumentaciones, con las cuales pretende excluir de la valoración probatoria la “GRABACIÓN MAGNETOFÓNICA TOMADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL CUAL SE EXPONEN LAS RAZONES DE LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO CONTRACTUAL” aportada como medio probatorio por la parte demandante.

Lo anterior, por cuanto la nulidad propuesta por el apoderado judicial de la demandada, no reúne los requisitos para ser alegada, en los términos del art. 135 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud de la remisión normativa contenida en el art. 145 del CPTSS.

“ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. *La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.” (Negrillas de la Sala).

Y el requisito que echa de menos la parte demandada es precisamente la causal de nulidad en la que se funda el incidente, pues lo relatado por el apoderado judicial del CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S., (ilicitud de la prueba por violación al derecho a la intimidad) no encuadra en las causales de nulidad taxativamente enlistadas en el art. 133 del Código General del Proceso, veamos:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

- 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.***
- 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.***
- 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.***
- 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.***
- 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.***
- 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.***
- 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.***
- 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean***

indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.”

Por lo tanto, al no satisfacerse los requisitos del art. 135 del Código General del Proceso, era deber del administrador de justicia rechazar de plano el incidente de nulidad propuesto, como efectivamente ocurrió.

Advirtiéndolo la Sala, que en el sub lite tampoco se dan los presupuestos de ilicitud o ilegalidad de la prueba para declarar probada la causal genérica de nulidad en los términos del art. 29 de la Constitución Política de 1991.

“ARTICULO 29. *El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

El derecho de probar y de contradecir una prueba, consagrado en la primera parte de la disposición constitucional citada, también presupone unos límites, que no pueden ser ejercidos en forma arbitraria, inconsulta o ilimitadamente, en franco desconocimiento del ordenamiento jurídico, o soslayando caras garantías de carácter fundamental, puesto que está sometido al debido proceso, y por ello la regla general que debe aplicarse, cuando para la obtención de un medio de convicción se vulnere o erosione un derecho fundamental, será la sanción de nulidad constitucional (ex constitutionis).

Significa lo anterior, que aquellas pruebas violatorias del debido proceso, deben ser excluidas ya sea por su “ilicitud” o por su “ilegalidad” entendiendo por lo primero aquella que pretermite o conculca específicas garantías o derechos de estirpe fundamental, y por lo segundo aquella prueba irregular, obtenida sin apego a la ley o al procedimiento.

Ahora bien, cuando el elemento que se aporta como prueba al proceso, se ubica en la categorías de la “ilicitud”, corresponde al administrador de justicia, efectuar un análisis crítico de la prueba, verificado previamente que, la misma se obtuvo con violación a los derechos fundamentales, aplicar un criterio excluyente, declarándola nula de pleno derecho; ahora, cuando tales instrumentos, son catalogados en el segundo contingente “ilegalidad”, es porque su obtención, aportación y práctica, se hace vulnerando precepto de rango legal o de procedimiento.

Sin embargo, y a manera de excepción a la regla general de exclusión probatoria, podría el operador jurídico valorar una prueba ilícita, utilizando un criterio de proporcionalidad o ponderación, bajo el cumplimiento de excepcionales parámetros, veamos:

- a) exista tensión entre el presunto derecho vulnerado con la obtención de la prueba y el derecho que con aquella se pretenda salvaguardar,
- b) su obtención o aprehensión no invada la órbita de la intimidad, frente a quien se pretenda aducir,
- c) verificar qué tipo de prueba es la que se pretende hacer valer -documentos, grabaciones, películas, etc.-.,

- d) la índole de los intereses en debate, esto es, si está o no comprometido el interés social, el orden público, el trabajo, la estabilidad familiar, la libertad, la seguridad y la solidez del tráfico mercantil, etc-;
- e) el origen circunstancial de la prueba.

En efecto, es deber del operador jurídico constatar la ocurrencia o no de una verdadera afectación al debido proceso y a los derechos fundamentales de las partes, para decidir sobre la exclusión de una prueba, y en dicho análisis, tratándose de ilicitud de la prueba, ha de tenerse en cuenta el DERECHO A LA INTIMIDAD consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de 1991, derecho fundamental que implica una garantía que tienen todas las personas de no ser escuchadas ni vistas si no lo quieren y consienten, impidiendo con ello que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas, para ser divulgadas o utilizadas como pruebas en procesos judiciales, salvo que medie la expresa autorización de todos los que son grabados.

No obstante, ese derecho a la intimidad no es absoluto y menos tratándose de grabaciones magnetofónicas, las cuales de tiempo atrás han sido permitidas la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, como pruebas legales *“si quien graba es el destinatario de la llamada o víctima de la conducta punible”*.

En una de estas providencias, con radicación 48.965 del 18 de diciembre de 2019, M.P. Ramiro Alonso Marín Vásquez, la Alta Corporación aclaró que la ilegalidad que se predica de la grabación efectuada por una de las partes que interviene en la conversación, no era de recibo por lo siguiente: *“...Incluso, jurisprudencialmente se ha insistido en que una grabación no puede ser estimada cuando carece de autorización judicial o es efectuada por terceros que no tienen interés en la investigación, pero si el registro magnetofónico o audiovisual es realizado por una de las partes no existe violación del derecho a la intimidad si una de ellas decide publicarlo, adquiriendo la categoría de prueba legalmente válida...”*

Y descendiendo a la especialidad laboral, esa ponderación del derecho a la intimidad, sucumbe ante los derechos laborales, que se encuentran en discusión en el sub lite, al estar en juego un reintegro por estabilidad laboral reforzada a favor de la señora MARÍA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO.

Advirtiéndole la Sala que en la valoración probatoria que se efectúe frente a la grabación magnetofónica aportada, solo podrán tener validez las declaraciones del empleador o su representante que libres y espontáneas, en las que no medie interferencia del trabajador, además el contenido de la grabación solo puede ser transcrito en aquello que sea relevante, pertinente a la materia laboral debatida, dejando por fuera aspectos íntimos de la vida familiar, personal o sexual del empleador, los cuales deberán mantenerse dentro de la esfera de lo privado y no pueden ser objeto de transcripción, revisión y mucho menos de reproche judicial.

Y dado que en el presente asunto la demandante MARÍA ELIZABETH RESTREPO RESTREPO hizo parte de la conversación objeto de grabación, y que lo allí dicho, no desborda la esfera laboral, y no compromete el derecho a la intimidad del empleador, era pertinente el decreto de la referida prueba, la cual será valorada como cualquier otro documento, tal como lo señala el art. 243 del Código General del Proceso. Motivos por los cuales se confirmará lo resuelto en este sentido, al no existir causal legal o constitucional que avale el incidente de nulidad propuesto por la pasiva.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la prosperidad parcial del recurso de apelación formulado, no habrá lugar a imponer costas procesales en las instancias.

V – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, en cuanto no se decretó y ordenó la práctica de la prueba consistente en la DECLARACIÓN DE PARTE respecto a las señoras CLAUDIA PATRICIA LONDOÑO ÁNGEL y CLARA MARÍA VELÁSQUEZ MOLINA, quienes fungen como Representantes Legales – Principal y Suplente de la sociedad demandada CENTRO EDUCATIVO LOS OSITOS S.A.S., para en su

lugar, ORDENAR el decreto y práctica de la referida prueba en los términos solicitados por el apoderado judicial de la parte demandada.

SEGUNDO: CONFIRMAR el auto interlocutorio objeto de apelación a través del cual se rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, según lo expuesto en precedencia.

TERCERO: Sin costas procesales en esta instancia.

Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del expediente al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 087 del 24 de Mayo de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>.